

Ponencia presentada en el XXXIV Congreso Internacional de Estudios Electorales:
Representatividad y legitimidad en la construcción democrática.

Alberto Silvestre Pineda

alberto.silvestre@politicass.unam.mx

Introducción

¿Cómo se aprueba el presupuesto para los OPLs? ¿Qué porcentajes del presupuesto solicitado es aprobado por los congresos estatales? ¿Con base en qué elementos se determina el monto del presupuesto? ¿Por qué es importante el presupuesto de los OPLs para su desempeño? Esta ponencia busca responder estas preguntas a partir del análisis de dos conjuntos de datos: el primero son los montos de los Acuerdos de los Consejos locales de cada uno de los 32 OPLs donde definen su proyecto de presupuesto. El segundo son los montos aprobados por los congresos estatales mediante decretos de egresos que se publican en los diarios oficiales locales. Estos presupuestos corresponden a la organización de los procesos electorales durante el periodo 2015-2021 en donde se celebraron cerca de 100 elecciones locales. Este monto incluye el presupuesto para los partidos políticos locales, estipulado en la Constitución federal y las constituciones locales de los 31 estados de la República y la ciudad de México. El objetivo final es sentar las bases para determinar los efectos del presupuesto sobre su desempeño durante los procesos electorales locales.

1. Órganos de administración electoral (OAE)

Un órgano de administración electoral es una organización que tiene el único propósito, y es legalmente responsable, de administrar todos o algunos de los elementos que son esenciales para la realización de elecciones e instrumentos de democracia directa, como los referéndums, iniciativas ciudadanas o revocatorias de mandato. Entre los elementos esenciales incluyen:

- a) Determinar quién es elegible para votar;
- b) Recibir y validar las nominaciones de los participantes electorales (para elecciones, partidos políticos o candidatos);
- c) Recibir la votación;
- d) Conteo de votos; y
- e) Publicación de resultados (Catt, H., et., al.,, 2014, pág. 5).

Estas actividades son realizadas por uno o más órganos y todo aquel que las realiza es considerado como tal. Dadas las múltiples características de estos órganos, la literatura sobre el tema se enfocó en clasificarlos con base a su independencia, con el objetivo de analizar cuáles generaban mejores condiciones para las transiciones exitosas.

Principales clasificaciones de los OAE

Las principales clasificaciones se basaron en los órganos encargados de la administración electoral independientes del poder judicial o parlamentos (Pastor, 1999); del gobierno (López Pintor, 2004); o de los partidos políticos (Hartlyn, et., al., 2009). Aquellos que tenían elementos de ambos extremos de les denominó “mixtos”.

La importancia de los OAE se fortaleció a partir de considerar a la administración electoral como una variable explicativa para las transiciones a la democracia: “El hecho de que no se celebren elecciones justas para todas las partes puede impedir una transición democrática” (Pastor, 1999, 2). A continuación, las principales clasificaciones.

Rafael Pastor proporciona cinco modelos de OAE dentro del gobierno, independientes y compuesto por representantes de partidos políticos.

- a) Oficina electoral dentro del gobierno;
- b) Oficina electoral dentro de un ministerio del gobierno, pero supervisado por un cuerpo judicial;
- c) Una comisión electoral independiente manejado por expertos y directamente responsable al parlamento;
- d) Una comisión electoral multipartidista compuesta por representantes de los partidos políticos;
- e) Una no partidista comisión electoral compuesta por una distinguida lista de individuos (Pastor, 1999, pág. 12-3).

Con esta clasificación se sostuvo que los órganos de administración electoral independientes del gobierno y partidos políticos, habían sido fundamentales en las transiciones a la democracia de varios países y que su manipulación deliberada por parte de gobernantes autoritarios bloqueó muchas otras (Mozaffar & Schedler, 2002).

En un estudio sistematizado a nivel mundial, Rafael López Pintor identifica cinco modelos de OAE:

- a) Comisión electoral o tribunal que es independiente del ejecutivo;
- b) Comisión gubernamental supervisada por jueces, profesionales y representantes de partidos políticos;
- c) Administración exclusivamente gubernamental;
- d) Administración electoral descentralizada con la coordinación de una autoridad nacional, ya sea independiente, gubernamental o de una asociación profesional (López-Pintor, 2000).

A principios del siglo XXI, Rafael López Pintor (2000, 123), señaló que, si bien la presencia de autoridades electorales independientes no era una condición suficiente para garantizar elecciones libres y justas, la tendencia fue que más de la mitad de las democracias en el mundo contaban con este modelo de organización electoral.

Una última clasificación es formulada por Hartlyn, et., al., cuya independencia gira principalmente de los partidos políticos.

- a) Dominado por un solo partido;
- b) Mixto partidizado;
- c) Independiente/mixto partidizado;
- d) Independiente de los partidos (Hartlyn, Jonathan; et., al., 2009, pág. 22).

En un estudio sobre América Latina, Hartlyn, et., al., (2009) confirmaron la tendencia de que los órganos de administración electorales profesionales e independientes, ajenos a la influencia partidaria y del control estatal, tienen mayores probabilidades para que las elecciones sean exitosas, en comparación con órganos dominados por un único partido político.

2. Los Organismos Públicos Electorales Locales en México

México es una república federal donde los estados miembros tienen su propio marco normativo (su propia Constitución, leyes y reglamentos). En materia electoral cuentan con Instituciones electorales que, desde su fundación en la década de 1990, desarrollaron sus propios diseños institucionales, siguiendo lineamientos de la legislación federal.

La cantidad y diversidad de diseños institucionales locales motivó estudios comparados para conocer cambios y similitudes entre estos arreglos. Por ende, muchos trabajos se centraron en el análisis de las legislaciones electorales locales.

La literatura sobre administración electoral local en México puso énfasis en el marco normativo para explicar el desempeño de los OE, después de que la reforma electoral de 1996 detonara múltiples cambios en las legislaciones de los estados (p. e. Méndez de Hoyos, 2005; Monsiváis Carrillo, 2009; Ley, 2007; Astudillo, 2018; Merino, 2002; Peschard, 2008).

Al respecto se realizaron estudios comparativos que buscaron medir la justicia de las legislaciones locales, principalmente, después de la reforma electoral de 1996 (Méndez de

Hoyos, 2005; Monsiváis Carrillo, 2009; Ley, 2007); sobre el desarrollo del federalismo electoral en México (Astudillo, 2018; Merino, 2002; Peschard, 2008). La reforma de 2007 también generó estudios sobre sus efectos a nivel local (Mirón Lince, 2011; Pérez Fernández Del Castillo, 2007; Vargas, 2011). De igual forma sobre la participación de la autoridad nacional en elecciones locales después de la reforma de 2014 (Becerra, 2015; Marván, 2014; Medina Torres, 2016; Molina, 2014; Osorio Chong, 2014; Zamitiz, 2017).

El tema de los órganos electorales locales en México ha sido de suma importancia para los especialistas, ya que la condición de país federal favoreció estudios comparativos con un número de casos mediano y con contextos controlados (Snyder, 2009).

El tema de la organización electoral local en México ha sido de suma importancia para los especialistas, ya que la condición de país federal ha favorecido estudios comparativos con un número de casos mediano y con contextos controlados.

No obstante, se ha dado por sentado la dimensión administrativa (Pastor, 1999, 6), partiendo del supuesto de su funcionamiento homogéneo a pesar de que todos los institutos cuentan con diferentes diseños organizacionales. Con ello, resultó complicado entender si había relaciones causales entre la organización de los Institutos locales y su desempeño.

Con ello resultó complicado conocer si las fallas en la administración electoral son generadas por la actuación de funcionarios electorales o por situaciones políticas; si existe control de los gobiernos sobre los órganos electorales a través del presupuesto y qué efectos genera; o si la actuación de otros actores políticos, como partidos y candidatos, socavan el desempeño de las autoridades electorales, por mencionar algunos ejemplos.

En cambio, los estudios sobre el tema se centraron en conocer las limitaciones de las autoridades electorales locales, provocada por los mecanismos de selección de los consejeros electorales. Desde la década de 1990 se evidenció que estas autoridades no eran lo suficientemente sólidas para producir confianza y garantizar comicios incontrovertibles (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2015, 374), ya que carecían de independencia y confianza por parte de los actores políticos.

Para contrarrestar esta tesis, las últimas reformas en la materia han aumentado la participación de la autoridad nacional en los procesos locales, asumiendo atribuciones que originalmente desempeñaban los institutos locales.

Uno de los argumentos de los legisladores para restar facultades a los órganos electorales locales en la reforma electoral de 2014, fue “se homologuen las calidades de los procesos electorales federal y de las entidades federativas”. Con ello, un conjunto de atribuciones que realizaban éstos fueron trasladadas a la autoridad nacional, sumándose a otras como la expedición de la credencial para votar; la administración de los tiempos de radio y televisión; el registro federal de electorales y la fiscalización, en los procesos electorales locales.

Esta desconfianza ha generado, desde tiempo atrás, la discusión sobre la permanencia o no de las autoridades electorales locales. La reforma electoral de 2014, lejos de ser una reforma “definitiva” sobre la gobernanza electoral local, profundizó el debate sobre la centralización de la organización electoral en las entidades de la República. Desde entonces han resurgido iniciativas para culminar el proceso con la desaparición de los OPLs.

La reforma electoral de 2014 pasó a la autoridad nacional actividades que representaban mayores complicaciones para los OPLs y ahora tienen el apoyo de la autoridad nacional en cada elección. El objetivo fue mejorar la calidad de los procesos electorales locales. En 2021 todos los estados han celebrado elecciones para renovar cargos locales y los resultados de la reforma de 2014 están por analizarse.

2.2 Financiamiento Órganos de Administración Electoral

Estudios comparados sobre el financiamiento a los órganos de administración electoral¹ son escasos dentro de la literatura, ya que resulta complicado comparar el costo de las elecciones en diferentes países y condiciones diferentes (Center for Transitional and Post-Conflict Governance, 2005, pág. 5). En consecuencia, ha resultado complicado relacionar esta dimensión con índices como, por ejemplo, la integridad electoral.

¹ Los órganos de administración son el individuo o conjunto de organizaciones que tienen las tareas de administrar alguno o todos los elementos que son esenciales para la realización de las elecciones (James et al., 2019, 299).

Entre las causas de este vacío es la ausencia de bases de datos confiables para realizar estas comparaciones (Clark, 2019). Asimismo, es complejo obtener información confiable de múltiples países, ya que en su mayoría estos datos son proporcionados por órganos gubernamentales que pueden complicar su obtención (James & Jervier, 2017, 2).

Estudios al interior de los países han tratado de superar estas limitaciones; sin embargo, se han enfrentado al reto de contar con diferentes jurisdicciones y en cada una se tiende a registrar similares costos en diferentes categorías (Montjoy, 2010, 367) o, incluso, registrar gastos diferentes para los mismos artículos, dependiendo cada estado o provincia (García Ramírez, 2014).

Dentro de los pocos trabajos sistematizados sobre el tema, la Encuesta Mundial sobre el Costo del Registro y Elecciones señala que el contexto democrático influye en el costo de las elecciones. Es decir, hay diferencias entre el costo de las elecciones celebradas en democracias establecidas, en transición y las realizadas en un país en conflicto, y la tendencia es que el costo sea mayor en contextos de democracias en transición y en conflicto político (López Pintor, 2005).

Por su parte, Robert Pastor (1999, 17-18) señaló que entre países desarrollados, una comisión electoral independiente, imparcial, con autoridad, competente y con adecuados recursos, tiene más probabilidades de organizar elecciones libres y justas.

Con estudios de caso se ha dado cuenta de la importancia de los recursos para la administración electoral. Entre más recursos se asignen, mayores serán los niveles de desempeño de la administración electoral, al contar con mayor capacidad en términos de personal, entrenamiento y procedimientos (Clark, 2019). Por el contrario, recortes a las autoridades electorales debilitan su capacidad para realizar actividades orientadas a la organización electoral (James & Jervier, 2017).

La relevancia del tema es que los costos de las elecciones suelen ir en aumento; mientras que los presupuestos tienden a ser más limitados (Montjoy, 2010) y los retos sobre la administración electoral cada vez más complicados (James & Jervier, 2017).

Por otro lado, existe un problema conceptual que dificulta las comparaciones sobre el financiamiento para las elecciones. La mayoría de los trabajos al respecto son sobre países

Europeos que cuentan con autoridades electorales gubernamentales o mixtas y se enfocan en el “costo de las elecciones”, para englobar todos los gastos relacionados con las elecciones, sea quien sea el administrador, para superar el dilema de quién y qué funciones realiza respecto a las elecciones (Clark, 2017, 2019; James & Jervier, 2017).

Sin embargo, en países con órganos electorales independientes son órganos administrativos o jurisdiccionales quienes realizan la mayoría de las tareas de administración electoral y es su presupuesto el utilizado para medir el costo de las elecciones.

Por lo tanto el hecho de que haya órganos electorales independientes y gubernamentales (López-Pintor, 2000), es una primera variable para realizar comparaciones. Los órganos electorales dentro del gobierno se apoyan de la estructura y personal gubernamental para realizar sus actividades; mientras que los independientes deben reclutar y construir sus propios organismos, lo cual marca diferencias de origen que dificultan la comparación sobre el presupuesto que reciben.

Por otro lado, si bien los órganos electorales independientes son la tendencia a nivel mundial (Ace Project, 2022), no todos concentran en un mismo órgano las tareas de gobernanza electoral (Mozaffar & Schedler, 2002). Existen países que separan la parte administrativa y jurisdiccional en más de un organismo y otros que reúnen estas dos dimensiones en uno solo.

Si se concentrara en órganos que se encargan exclusivamente de la parte administrativa, dejando de lado la jurisdiccional, aún deberían considerarse otros matices, ya que también hay variaciones importantes entre las tareas de administración electoral que son encomendadas a estos organismos. Fiscalización, capacitación, padrón electoral, cómputo de votos, delimitación de distritos, financiamiento a partidos políticos, monitoreo de medios, entre otros, son algunas tareas que no siempre las realiza el mismo organismo.

Partiendo del supuesto de que un órgano electoral entre más complejo requiere más personal y con ello un mayor presupuesto, resulta complicado comparar el presupuesto de un órgano que realiza todas estas tareas con otro cuya función se limita a unas cuantas.

Además, el tamaño de cada país-caso es muy diferente, lo cual complica la comparación. Resulta complejo comparar, por ejemplo, el órgano electoral de Brasil con el de Costa Rica dado el número tan disímil de electores. Para controlar esta variable se ha medido el costo

por elector a través de dividir el presupuesto para las elecciones entre el número de electores registrado (López Pintor, 2005); sin embargo, esto no resuelve el problema, ya que esta es solo uno de las muchas variables sobre el costo de las elecciones (Montjoy, 2010, 870).

De acuerdo con *Ace Proyect* (2022), en dos terceras partes de los países a nivel mundial, el poder legislativo determina el presupuesto del órgano electoral nacional; no obstante, hay matices en este mecanismo. Por ejemplo, en América Latina si bien sigue esta tendencia, en algunos casos también participa en Poder Ejecutivo, al recibir directamente del órgano electoral el proyecto de presupuesto para enviarlo al poder legislativo para su aprobación.

En Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, El Salvador y Brasil si bien envían al ejecutivo su presupuesto, éste no puede modificarlo y debe enviarlo de forma directa al proyecto en general que envía al Congreso. En Guatemala el presupuesto del órgano electoral está garantizado por ley y no debe ser menos del 0.5% del presupuesto general. En El Salvador el órgano electoral trabaja de forma conjunta con el Ministro de Hacienda y este lo incluye en el proyecto general que el gobierno manda al Congreso. Por su parte en Brasil el órgano electoral presenta de forma directa su propuesta al Parlamento sin que el Ejecutivo interfiera (Jaramillo, 2007, pág. 371-423).

2.2.1 El costo de las elecciones en México a nivel local

Con el análisis subnacional sobre el financiamiento a las autoridades electorales se pueden superar algunas de las limitaciones señaladas y arrojar luz sobre la importancia del financiamiento para las autoridades electorales.

En México el modelo de administración electoral es independiente tanto a nivel federal como local. Al ser un país federal cuenta con una autoridad nacional y 32 autoridades locales encargadas de organizar las elecciones en todos los ámbitos. Las tareas de gobernanza electoral se dividen en dos órganos: administrativos y jurisdiccionales.

A nivel federal el INE es el encargado de la parte administrativa y el TEPJF de la parte jurisdiccional. A nivel local esta división se mantiene y son los OPLS los encargados de la parte administrativa y los tribunales locales de la jurisdiccional.

Las tareas de gobernanza electoral que cada ente desempeña vienen definidas en la Constitución federal para ambos órganos, con lo cual se controla la variable del número de actividades que cada órgano realiza.

Por último, todas las actividades que realizan los órganos electorales son públicas y la información que emitan también. Con ello es posible conocer detalles sobre los montos solicitados y su ejercicio.

El presupuesto anual de los OPL es aprobado por su Consejo y enviado al ejecutivo local para que lo incluya dentro de su proyecto anual que envía al congreso local. Posteriormente el congreso local decide si hace modificaciones o lo aprueba. Aunque las autoridades electorales locales tienen autonomía administrativa y financiera, la aprobación de su presupuesto depende del congreso local.

Si bien el Instituto Nacional Electoral también es participe en la organización de las elecciones locales y tiene partidas presupuestales para estas actividades, este trabajo solo considera los presupuestos que asignan los presupuestos locales a los órganos electorales locales.

En el siguiente apartado se realiza una descripción sobre el financiamiento público de los Órganos Públicos Electorales Locales durante el periodo 2015-2021.

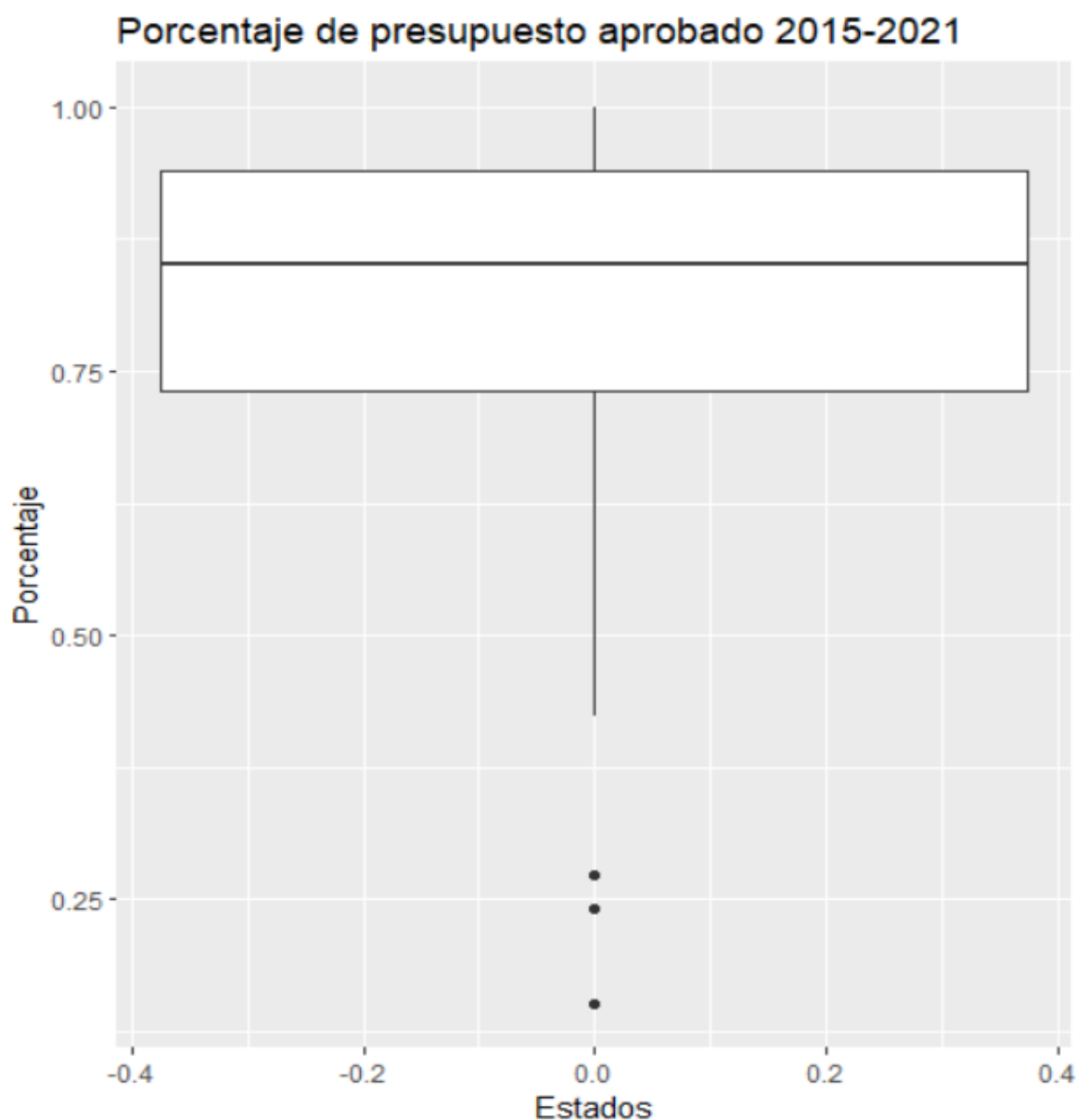
2.2.2 Presupuestos OPLS 2015-2021

A través de solicitudes de información a los 32 OPLs, revisión de acuerdos aprobados por los consejeros locales sobre financiamiento y los presupuestos de egresos aprobados por los congresos locales, se construyó la base de datos que compara el presupuesto que solicitó el OPL y el aprobado por el congreso local.

El apartado abarca el periodo de 2015 a 2021 en donde se realizaron elecciones para gobernador. La mayoría fueron concurrentes con elecciones de diputados locales y presidentes municipales. La muestra abarca 49 casos, que incluyen elecciones exclusivamente de gobernador (3); elecciones para gobernador concurrentes con diputados locales (3); y elecciones concurrentes de gobernador, diputados locales y alcaldes (43).

Los montos incluyen el presupuesto asignado para el financiamiento de partidos políticos locales. Aunque estos recursos no forman parte del patrimonio de los OPLS, son ellos quienes realizan la solicitud al congreso local y reciben el presupuesto para su ministración a los partidos, cuyo monto está asegurado en las constituciones federal y locales.

Divididos por deciles, la gráfica 1. muestra que solo seis casos recibieron el 100% del presupuesto solicitado por el consejo local del OPL: Nuevo León 2015, Michoacán 2015, Chihuahua 2021, Guanajuato 2018, Tamaulipas 2016 y CDMX 2018.



Fuente: elaboración propia con datos de los OPLs.

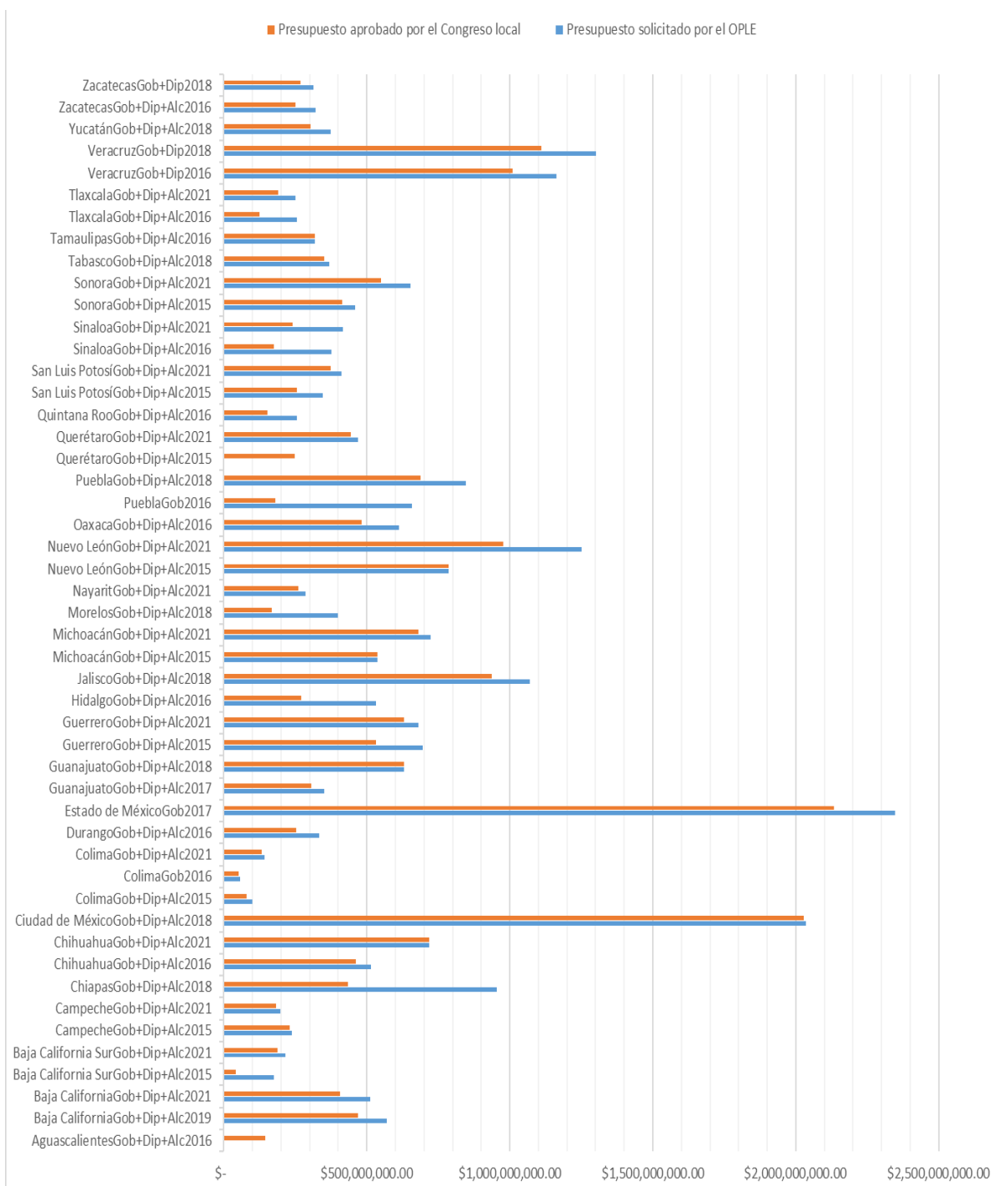
Trece casos recibieron entre el 90 y 99 por ciento de lo solicitado: Campeche 2015, Tabasco 2018, Querétaro, Michoacán, Colima, Guerrero, Campeche y Nayarit en 2021, Colima 2016, Estado de México 2017, San Luis potosí en 2021, Sonora 2015 y Chihuahua 2016.

11 casos recibieron entre el 80 y 89 por ciento: Jalisco 2018, Guanajuato 2017, Baja California Sur 2021, Veracruz 2016, Zacatecas 2018, Veracruz 2018, Sonora 2021, Baja California 2019, Puebla 2018, Yucatán 2018 y Colima 2015.

8 casos recibieron entre el 70 y 74 por ciento: Baja California 2021, Oaxaca 2016, Zacatecas 2016, Nuevo León 2021, Guerrero 2015, Durango 2016, Tlaxcala 2021 y San Luis Potosí 2021.

Ningún caso aparece entre el 60 y 69 por ciento. Tres casos entre el 50 y 59 por ciento: Quintana Roo 2016, Sinaloa 2021 e Hidalgo 2016. Cuatro casos lograron entre el 40 y 49 por ciento: Tlaxcala 2016, Sinaloa 2016, Chiapas 2018 y Morelos 2018. Por último, dos casos obtuvieron entre el 20 y 29 por ciento: Puebla 2016 y Baja California Sur 2016.

Presupuesto solicitado por los OPLs, y el aprobado por los congresos locales

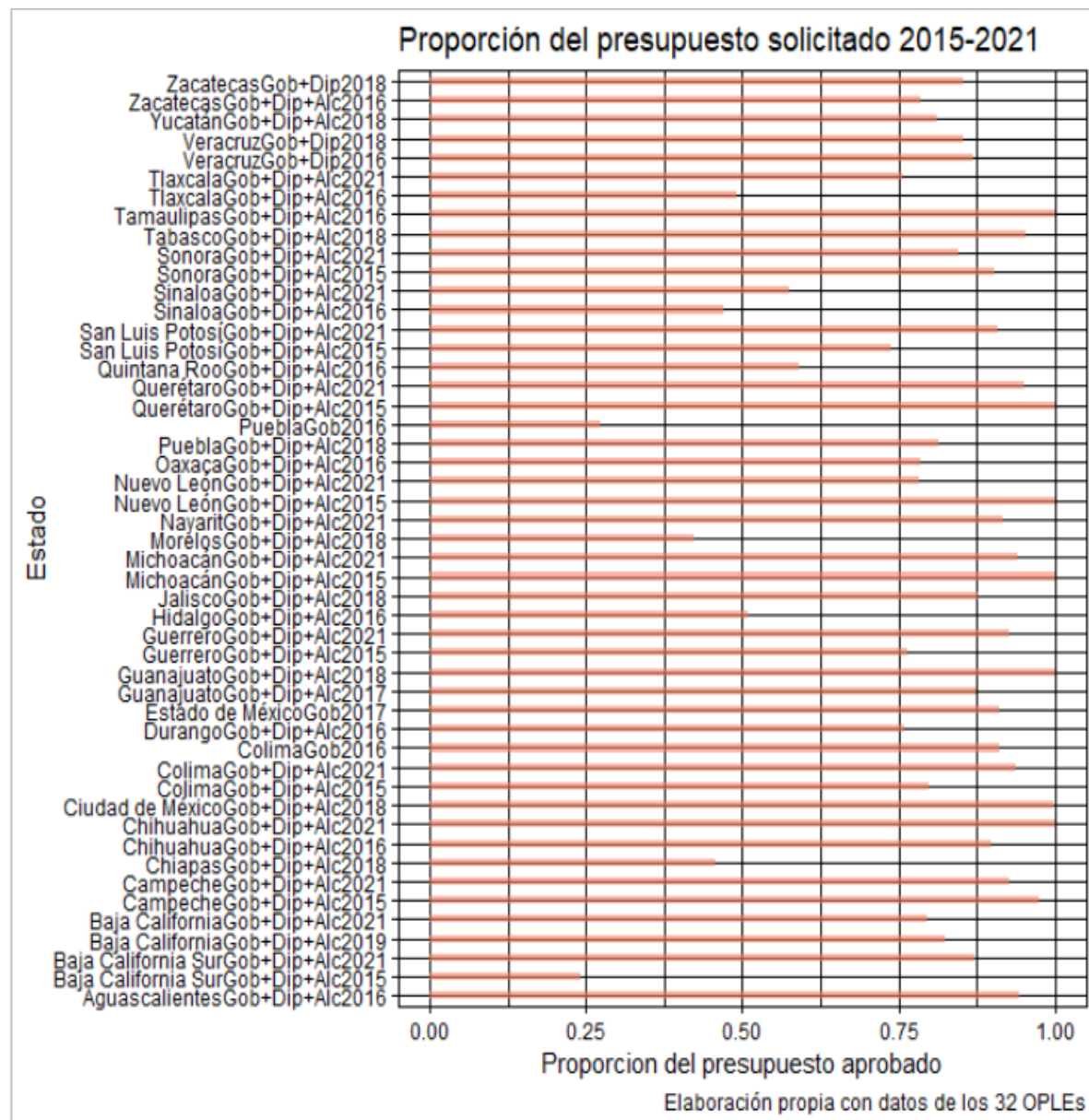


Fuente: elaboración propia con datos de los OPL

Como se observa en la gráfica, la aprobación del 100% del presupuesto solicitado por los OPLs es la excepción y no la regla. En solo seis casos (Nuevo León 2015, Michoacán 2015,

Chihuahua 2021, Guanajuato 2018 y Tamaulipas 2016), se aprobó la totalidad de los recursos solicitados.

Por otro lado, las proporciones de los presupuestos solicitados que se aprueban por parte del Congreso que hay casos extremos en donde el Congreso local ha aprobado cerca de la cuarta parte del presupuesto solicitado por el OPL como ocurrió con el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) en la elección de gobernador en 2016.



Fuente: elaboración propia con datos de los OPL

Cabe señalar que en los casos donde el congreso local aprobó un presupuesto menor a los montos no son definitivos. Cuando esto ocurre los consejeros electorales realizan solicitudes al congreso local para ampliar el monto aprobado y alcanzar el monto requerido. En algunos casos tienen éxito, pero en otros no.

En este apartado se consideró las cifras solicitadas por el OPL y las aprobadas por el congreso local, ya que el hecho de que se apruebe un monto menor al solicitado, marca la pauta sobre la relación entre ambas instituciones.

Durante el proceso de solicitud de ampliación, hay negociaciones entre consejeros electorales locales, grupos parlamentarios y el gobierno local para alcanzar acuerdos, los cuales son el mecanismo a través del cual estos poderes buscan presionar a la autoridad electoral. Incluso previo a la aprobación existen presiones por parte de los gobernadores en turno, quienes han modificado los proyectos que los OPLs les envían y mandado un monto menor al Congreso local para su aprobación, o condicionando la entrega del presupuesto a cambio de designaciones al interior del órgano electoral local (Faustino, 2020).

Anexo 1. Presupuesto OPLs 2015-2021

Estado	Elección	año	Solicitado por el OPL	Aprobado por el Congreso local	%
Querétaro	Gob+Dip+Alc	2015		\$ 248,058,029	
Nuevo León	Gob+Dip+Alc	2015	\$ 784,899,083	\$ 784,903,890	\$ 1.00
Michoacán	Gob+Dip+Alc	2015	\$ 536,132,729	\$ 536,132,730	\$ 1.00
Chihuahua	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 718,508,527	\$ 718,508,528	\$ 1.00
Guanajuato	Gob+Dip+Alc	2018	\$ 630,080,057	\$ 630,080,057	\$ 1.00
Tamaulipas	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 319,236,570	\$ 319,236,570	\$ 1.00
Ciudad de México	Gob+Dip+Alc	2018	\$ 2,035,804,951	\$ 2,028,180,768	\$ 1.00
Campeche	Gob+Dip+Alc	2015	\$ 236,924,377	\$ 230,924,377	\$ 0.97
Tabasco	Gob+Dip+Alc	2018	\$ 367,664,316	\$ 350,000,000	\$ 0.95
Querétaro	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 468,325,704	\$ 445,046,794	\$ 0.95
Michoacán	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 724,363,913	\$ 679,999,839	\$ 0.94
Colima	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 141,404,705	\$ 132,571,180	\$ 0.94
Guerrero	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 679,508,220	\$ 630,074,911	\$ 0.93
Campeche	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 198,225,618	\$ 183,544,657	\$ 0.93
Nayarit	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 284,496,470	\$ 260,496,469	\$ 0.92
Colima	Gob	2016	\$ 56,698,626	\$ 51,573,207	\$ 0.91

Estado de México	Gob	2017	\$ 2,346,464,386	\$ 2,133,686,595	\$ 0.91
San Luis Potosí	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 411,198,000	\$ 373,792,004	\$ 0.91
Sonora	Gob+Dip+Alc	2015	\$ 460,000,000	\$ 414,850,849	\$ 0.90
Chihuahua	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 514,653,874	\$ 461,463,967	\$ 0.90
Jalisco	Gob+Dip+Alc	2018	\$ 1,068,910,480	\$ 936,376,806	\$ 0.88
Guanajuato	Gob+Dip+Alc	2017	\$ 350,554,419	\$ 306,446,009	\$ 0.87
Baja California Sur	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 214,994,709	\$ 187,222,379	\$ 0.87
Veracruz	Gob+Dip	2016	\$ 1,163,272,310	\$ 1,009,000,000	\$ 0.87
Zacatecas	Gob+Dip	2018	\$ 313,773,911	\$ 267,985,665	\$ 0.85
Veracruz	Gob+Dip	2018	\$ 1,300,859,502	\$ 1,109,900,000	\$ 0.85
Sonora	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 651,544,874	\$ 550,000,000	\$ 0.84
Baja California	Gob+Dip+Alc	2019	\$ 569,654,627	\$ 469,654,627	\$ 0.82
Puebla	Gob+Dip+Alc	2018	\$ 847,550,431	\$ 688,561,704	\$ 0.81
Yucatán	Gob+Dip+Alc	2018	\$ 373,643,843	\$ 303,000,000	\$ 0.81
Colima	Gob+Dip+Alc	2015	\$ 100,204,573	\$ 79,923,626	\$ 0.80
Baja California	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 512,281,036	\$ 407,000,000	\$ 0.79
Oaxaca	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 612,788,991	\$ 480,594,749	\$ 0.78
Zacatecas	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 319,857,236	\$ 250,848,639	\$ 0.78
Nuevo León	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 1,250,350,221	\$ 976,862,025	\$ 0.78
Guerrero	Gob+Dip+Alc	2015	\$ 696,776,143	\$ 532,057,797	\$ 0.76
Durango	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 333,946,182	\$ 253,122,215	\$ 0.76
Tlaxcala	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 249,941,786	\$ 189,216,279	\$ 0.76
San Luis Potosí	Gob+Dip+Alc	2015	\$ 345,503,000	\$ 255,033,000	\$ 0.74
Quintana Roo	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 256,297,783	\$ 151,283,744	\$ 0.59
Sinaloa	Gob+Dip+Alc	2021	\$ 417,130,185	\$ 240,130,197	\$ 0.58
Hidalgo	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 531,855,290	\$ 270,226,339	\$ 0.51
Tlaxcala	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 254,949,873	\$ 125,000,000	\$ 0.49
Sinaloa	Gob+Dip+Alc	2016	\$ 375,569,655	\$ 176,083,410	\$ 0.47
Chiapas	Gob+Dip+Alc	2018	\$ 953,546,000	\$ 435,133,000	\$ 0.46
Morelos	Gob+Dip+Alc	2018	\$ 398,806,208	\$ 168,764,000	\$ 0.42
Puebla	Gob	2016	\$ 658,524,199	\$ 180,000,000	\$ 0.27
Baja California Sur	Gob+Dip+Alc	2015	\$ 174,554,807	\$ 42,000,000	\$ 0.24
Aguascalientes	Gob+Dip+Alc	2016		\$ 143,964,000	

Fuente: elaboración propia

Fuentes de consulta

- Astudillo, C. (2018). *El Derecho electoral en el federalismo mexicano*. Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Gobernación, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Becerra, P. J. (2015). El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales. In *El Nuevo Sistema Político Electoral Mexicano 2015* (pp. 1–39). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). Electoral Management Design, Revised Edition. In *International IDEA*.
- Clark, A. (2017). Identifying the determinants of electoral integrity and administration in advanced democracies: The case of Britain. *European Political Science Review*, 9(3), 471–492. <https://doi.org/10.1017/S1755773916000060>
- Clark, A. (2019). The cost of democracy: The determinants of spending on the public administration of elections. *International Political Science Review*, 40(3), 354–369. <https://doi.org/10.1177/0192512118824787>
- García Ramírez, E. C. (2014). *Los OPL de Nayarit, Veracruz, Nuevo León y Estado de México en la reforma electoral de 2014*. Instituto Electoral del Estado de México.
- Hartlyn, Jonathan; McCoy, Jennifer y Mustillo, T. (2009). La importancia de la gobernanza electoral y la calidad de las elecciones en la América Latina contemporánea. *América Latina Hoy*, 51, 15–40.
- James, T. S., & Jervier, T. (2017). The cost of elections: the effects of public sector austerity on electoral integrity and voter engagement. *Public Money and Management*, 37(7), 461–468. <https://doi.org/10.1080/09540962.2017.1351834>
- Jaramillo, J. (2007). Los Órganos Electorales Supremos. In J. Nohlen, Dieter; Zovatto, Daniel; Orozco, Jesús; Thompson (Ed.), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina* (pp. 371–423). Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Universidad de Heidelberg; Internacional IDEA; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Federal Electoral; Fondo de Cultura Económica.
- Ley Gutiérrez, S. J. (2007). *Descentralización e independencia electoral. Determinantes de la independencia de los institutos electorales en los estados mexicanos, 1990-2004*. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
- López-Pintor, R. (2000). *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance Bureau*. Bureau for Development Policy United Nations Development Programme.
- López Pintor, R. (2005). *Getting to the CORE. A Global Survey on the Cost of Registration and Elections*. Center for Transitional and Post-Conflict Governance, Bureau for Development Policy.
- Marván, M. (2014). Reforma electoral 2013-2014. Centralización como alternativa al sospechismo. *Análisis Plural*, 89. [https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1461/Reforma electoral 2013–2014. Centralización como alternativa al sospechismo.pdf?sequence=2](https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1461/Reforma%20electoral%202013-2014.%20Centralizaci%C3%B3n%20como%20alternativa%20al%20sospechosismo.pdf?sequence=2)
- Medina Torres, L. E. (2016). Gobernanza y régimen electoral en la reforma política de 2014. In *Temas selectos de Derecho Electoral*.

[https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/TSDE_52_Gobernanza y regimen electoral_Medina.pdf](https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files/archivos_libros/TSDE_52_Gobernanza_y_regimen_electoral_Medina.pdf)

- Méndez de Hoyos, I. (2005). Transición a la democracia en México. Competencia partidista y reformas electorales 1977-2003. In *Flacso México*.
- Merino, M. (2002). Federalismo electoral: varios sistemas y un solo ciudadano. In H. Concha Cantú (Ed.), *Sistema representativo y democracia semidirecta* (pp. 453–474). Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Mirón Lince, R. M. (2011). *Democracia en clave electoral. La ruta mexicana en la conformación de los órganos electorales*. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Molina, E. J. (2014). La reforma electoral de 2014: ¿un nuevo sistema electoral? *El Cotidiano*, 187, 13–22. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32531885002>
- Monsiváis Carrillo, A. (2009). La equidad electoral formal en las entidades federativas: México (1996-2007). *Perfiles Latinoamericanos*, 33, 7–37.
- Montjoy, R. S. (2010). The Changing Nature... and Costs... of Election Administration. *Public Administration Review*, 70(6), 867–875. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02218.x>
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512102023001001>
- Osorio Chong, M. Á. (2014). Reforma política y eficacia de la administración. *Revista de Administración Pública*, XLIX(1), 39–48. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/19811/17779>
- Pastor, R. A. (1999). The role of electoral administration in democratic transitions: Implications for policy and research. *Democratization*, 6(4), 1–27. <https://doi.org/10.1080/13510349908403630>
- Pérez Fernández Del Castillo, G. (2007). De la descentralización al centralismo en los procesos electorales. *Casa Del Tiempo*, 1(1), 63–66.
- Peschard, J. (2008). *El federalismo electoral en México*. Cámara de Diputados LX Legislatura, UNAM-FCPyS, Miguel Ángel Porrúa Editor.
- Snyder, R. (2009). Reducción de la escala: El método comparativo de unidades subnacionales. *Desarrollo Económico*, 49(194), 287–305.
- Vargas, P. (2011). México : reforma electoral de 2007 y su impacto en las elecciones locales. *Justicia Electoral*, 1(7), 117–149.
- Zamitz, H. (2017). La reforma político-electoral 2014-2015: ¿híbrido institucional o avance gradual del sistema democrático en México? *Estudios Políticos*, 40, 11–46. <https://doi.org/10.1016/j.espol.2016.10.009>